

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL
MAGISTRADA PONENTE: MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA

PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTES	JAIME ALONSO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DEMANDADOS	YOMAN YURANI ECHAVARRÍA LÓPEZ
PROCEDENCIA	JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CTO DE ENVIGADO
RADICADO	05266 31 05 001 2019 00459 01
SEGUNDA INSTANCIA	CONSULTA
TEMAS Y SUBTEMAS	- Contrato Prestación de Servicios – Honorarios Profesionales
DECISIÓN	CONFIRMA

SENTENCIA No. 018

Medellín, veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

En atención a lo previsto en el decreto 806 del 4 de junio de 2020 convertido en legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado en la SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL el presente asunto, según consta en Acta No. 003 de 2024, se procede a dictar **SENTENCIA** en orden a resolver el GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA en favor de la parte **DEMANDANTE** respecto de la Sentencia N° 107 del 4 de noviembre de 2022, proferida por el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO

ANTECEDENTES

El señor **JAIME ALONSO JIMÉNEZ JIMÉNEZ** presentó demanda ordinaria laboral en contra de la señora **YOMAN YURANI ECHAVARRÍA LÓPEZ**, con el fin de que: **1)** Se declare que entre las partes existió un contrato de prestación de servicios profesionales de abogado, en virtud del cual la demandada le adeuda los honorarios profesionales pactados. **2)** En consecuencia, solicitó condenar a la señora **YOMAN YURANI ECHAVARRÍA LÓPEZ** al pago de la suma de \$364.241.129, por concepto de honorarios acordados en la cláusula 4° del contrato de prestación de servicios suscrito. **2)** Así mismo, peticionó el pago de los intereses moratorios generados sobre las sumas adeudadas, desde que se hizo exigible el pago de la obligación hasta que la misma sea cancelada.

Como sustento de sus pretensiones, señaló que entre la señora **YOMAN YURANI ECHAVARRÍA LÓPEZ** y el señor **RIGOBERTO OSPINA RUIZ**, este último como profesional del derecho, se suscribió contrato de prestación de servicios profesionales de abogado, iniciando una relación como mandante y mandatario, respectivamente.

Que el objeto del contrato lo constituyó: “(...) LA MANDANTE otorga poder a EL MANDATARIO para que en su nombre y representación inicie y lleven hasta su terminación DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD ABSOLUTA de la escritura pública número 295 del 17 de junio de 2010 otorgada en la notaria Primera del Circulo Notarial de Yarumal Antioquia, en contra del señor NICOLÁS ARTURO ECHAVARRIA VELASQUEZ, mayor de edad, vecino y residente en Envigado (...)”.

Que con base en lo pactado, el abogado se comprometió a presentar la respectiva demanda ordinaria ante el Juez Civil del Circuito de Envigado, a más tardar dentro de los ocho (8) días siguientes a la firma del contrato, en el que además pactaron como honorarios lo siguiente: “(...) “CUARTA.- Las partes contratantes acuerdan tasar los honorarios profesionales por el sistema de cuota litis, en un porcentaje del treinta por ciento (30%) del valor de los derechos que le correspondan o llegaren a corresponder a LA MANDANTE en la sucesión de su finada madre ALIRIA DEL SOCORRO LOPEZ CRUZ. PARAGRAFO PRIMERO.- si la demanda ordinaria a que se refiere el presente contrato, tuviere segunda instancia, el porcentaje que LA MANDANTE reconocer a favor de EL MANDATARIO ser del treinta y cinco por ciento (35%) del valor de los derechos que le con respondan o llegaren a corresponder a LA MANDANTE en la sucesión de su finada madre ALIRIA DEL SOCORRO LOPEZ CRUZ; pero si se llegare a algún acuerdo antes de evacuar las pruebas solicitadas en la demanda y su contestación, el porcentaje será solo del quince por ciento (15%) del valor de los derechos que se le reconozcan a LA MANDANTE en la sucesión de su finada madre ALIRIA DEL SOCORRO LOPEZ CRUZ. PARAGRAFO SEGUNDO. - si se condenare en costas al demandado, el cincuenta por ciento (50%) de las agendas en derecho que se tasen serán para EL MANDATARIO (...)”.

Que, en cumplimiento de lo acordado, el abogado RIGOBERTO OSPINA RUIZ presentó la respectiva demanda el 28 de agosto de 2013, con lo cual dio inicio a las diligencias estipuladas en el acuerdo, correspondiéndole su conocimiento al Juzgado Primero de Familia de Envigado bajo Rad. 05266311000120130059100, admitida mediante providencia del 28 de enero de 2014. Así mismo, le fue concedido el amparo de pobreza previo al decreto de medidas cautelares peticionadas.

Posteriormente, una vez fue contestada la demanda y propuestas las excepciones por la PARTE DEMANDADA, el abogado OSPINA RUIZ presentó escrito pronunciándose al respecto el 29 de agosto de 2014. Que dentro del trámite en comento se han brindado las garantías procesales, siendo representada la parte activa por su apoderado.

En ese sentido, expuso el demandante que, desde el 29 de abril de 2015, por sustitución que hiciere el primer mandatario, asumió como apoderado de la demandante, actuación aceptada por el Juzgado de conocimiento en Auto del 7 de mayo de 2015.

Que dentro de su gestión adelantó actuaciones o diligencias como la remisión de comunicación al auxiliar de justicia designado por el Despacho, asistencia a audiencia de conciliación, saneamiento, fijación del litigio, y continuó incluso en diligencia de práctica de pruebas llevada a cabo el 22 de enero de 2015.

Que el 17 de agosto de 2016 la señora **YOMAN YURANI ECHAVARRÍA LÓPEZ**, coadyuvada por el apoderado de la parte demandada, allegó al proceso escrito a través del cual solicitó la “*terminación del proceso y levantamiento de medidas cautelares*”, petición a la que accedió el Juzgado mediante Auto N° 354 del 30 de septiembre de 2016, dando por finalizado el asunto con el consecuente levantamiento de las medidas cautelares.

Seguidamente, informó que el monto de los bienes que hacían parte de la sucesión de la que fue partícipe la demandada, según el estado de resultados y balance general presentados por la contadora pública a corte del 31 de diciembre de 2012, reflejó un patrimonio neto de \$2.428.274.195, monto del cual le correspondía a la pasiva la suma de \$1.214.137.095.

De ahí que, de acuerdo con lo pactado, en atención a que el proceso se encontraba pendiente de sentencia, le corresponde por honorarios la suma de \$364.241.129 (f. 3 a 8 Archivo 01 ED).

POSICIÓN DE LA ACCIONADA

En el momento procesal oportuno, la demandada **YOMAN YURANI ECHAVARRÍA LÓPEZ** dio contestación a la acción, oponiéndose a lo pretendido, tras anotar que si bien suscribió contrato de prestación de servicios con el abogado RIGOBERTO OSPINA RUIZ para la iniciación del proceso descrito en la demanda, este fue sustituido sin autorización suya al hoy demandante. Que durante el trámite de dicho litigio fue objeto de agresiones físicas y constantes amenazas por parte de quien fuera demandado, el señor NICOLÁS ARTURO ECHAVARRÍA VELÁSQUEZ, su padre, viéndose en la obligación de terminar de manera anticipada el proceso, con el levantamiento de las medidas en su contra.

Adujo que la violencia ejercida por su familiar fue tal, que ante el JUZGADO PRIMERO PENAL DE ENVIGADO se encuentra abierto proceso Rad. 052666000203201507132, en donde aquel es sindicado del delito de violencia intrafamiliar agravada.

Que pese a la terminación anticipada del proceso, a la fecha se encuentran cobrando de manera temeraria los honorarios que ella estima improcedentes, pues realmente además de no recibir nada producto del proceso iniciado, tampoco recibió concepto alguno por la sucesión de su señora madre. Propuso como excepciones las de: “(...) *INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN; COBRO DE LO NO DEBIDO; PRESCRIPCIÓN; IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS y COMPENSACIÓN (...)*” (f. 150 a 158 Archivo 01 ED).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Surtido el trámite de primera instancia, el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO, mediante Sentencia N° 107 del 4 de noviembre de 2022, decidió:

“(…) PRIMERO: DECLARAR probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido y en consecuencia se ABSUELVE a la señora YOMA YURANY ECHAVARRÍA LÓPEZ, identificada con la cédula de ciudadanía N° 1.037.606.542, de todas las pretensiones formuladas en su contra por el doctor JAIME ALONSO JIMÉNEZ JIMÉNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 98.496.701, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta Sentencia.

SEGUNDO: CONDENAR en Costas a cargo de la parte demandante, doctor JAIME ALONSO JIMÉNEZ JIMÉNEZ; fijándose como agencias en derecho la suma de UN MILLÓN DE PESOS M/L (\$1.000.000,00) en favor de la señora Yoma Yurany Echavarría López; según lo indicado en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: En caso de no ser apelada la presente decisión, se remitirá lo actuado ante el H. Tribunal Superior de Medellín, Sala de Decisión Laboral para que se surta el grado jurisdiccional de Consulta en favor de la parte demandante. (…)”.

Como fundamento de su decisión, el Juez de conocimiento inició recordando la definición del contrato del mandato contemplada en el Código Civil, punto en el que precisó que esta clase de vínculo bilateral comporta una serie de obligaciones para las partes, como lo es, para el mandante, pagar los honorarios acordados, los cuales pueden ser estipulados en un valor determinado conocido desde el principio del mandato, o aleatorio que es cuando el mandatario se compromete a realizar gestión judicial o extrajudicial, y en contraprestación recibe unos honorario a *cuota litis*, esto bajo el entendido de que, de no ser posible un resultado favorable, perderá todos los actos ejecutados, por cuanto su remuneración dependía de aquel. Así mismo, indicó que ambas formas de pago son perfectamente combinables.

A renglón seguido, citó lo considerado en la Sentencia SL3282-2022 a efectos de resaltar que la carga de la prueba en esta clase de asuntos recae sobre el accionante. En ese sentido, afirmó que en el particular no era motivo de discordia la existencia del contrato de prestación de servicios profesionales de abogado entre la demandada y el profesional RIGOBERTO OSPINA ORTIZ, documento invocado por la parte demandante para reclamar el pago pactado en la cláusula 4°, circunstancia de la que coligió el Juzgador, que el actor no era el legitimado para reclamar la cancelación de los honorarios allí previstos, en la medida en que actuó como sustituto del abogado contratado, ello sin autorización expresa de la demandante, con lo cual debía entenderse que la relación surgida entre el señor JIMÉNEZ JIMÉNEZ lo fue con el abogado principal y no con la accionada, esto sin desconocer la representación judicial que el aquí demandante efectuó en nombre de la otrora accionante ante el Juzgado de Familia de Envigado.

GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA

En atención a que no se interpuso recurso alguno en contra de la sentencia de primera instancia, el presente asunto se estudiará en virtud del GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA en favor de la parte **DEMANDANTE** conforme lo dispone el artículo 69 del CPTSS.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

A través de Auto de Sustanciación N°113 del 12 de abril de 2023, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, sin que se hubieren pronunciado al respecto. (Archivo 02 ED Tribunal).

PROBLEMA JURÍDICO

Surge para la Sala como problema jurídico a resolver, establecer si la señora **YOMAN YURANI ECHAVARRÍA LÓPEZ** está en la obligación de reconocer y pagar en favor del abogado **JAIME ALONSO JIMÉNEZ JIMÉNEZ** los honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios allegado por el accionante.

CONSIDERACIONES

Como supuestos de hecho debidamente demostrados en el *sub-lite* se tiene lo siguiente:

1. Que la señora **YOMAN YURANI ECHAVARRÍA LÓPEZ** suscribió contrato de prestación de servicios profesionales de abogado con el profesional RIGOBERTO OSPINA ORTIZ, cuyo objeto concernía a tramitar “(...) *DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD ABSOLUTA de la escritura pública número 295 del 17 de junio de 2010 otorgada en la notaria Primera del Circulo Notarial de Yarumal Antioquia, en contra del señor NICOLÁS ARTURO ECHAVARRIA VELASQUEZ (...)*” (f. 9 Archivo 01 ED).
2. Que en cumplimiento de lo pactado, el abogado inició el proceso en mención, el cual fue asignado para su conocimiento al JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE ENVIGADO, quien dispuso dar el trámite pertinente dentro del Rad. 001-2013-00591 (f. 10 a 22 Archivo 01 ED).
3. Mediante escrito del 29 de abril de 2015, el abogado RIGOBERTO OSPINA ORTIZ le sustituyó poder al abogado **JAIME ALONSO JIMÉNEZ JIMÉNEZ**, misma que fue aceptada por el Juzgado de Familia de Descongestión de Envigado (f. 28 a 29 Archivo 01 ED).
4. Que el abogado **JIMÉNEZ JIMÉNEZ** actuó en representación de la señora **YOMAN YURANI ECHAVARRÍA LÓPEZ** dentro de la audiencia de conciliación, saneamiento y fijación del litigio (Art. 101 CPC) (f. 35 a 41 Archivo 01 ED).
5. Posteriormente, a través de memorial radicado ante el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Envigado, el 17 de agosto de 2016, la señora **YOMAN YURANI ECHAVARRÍA LÓPEZ** solicitó la terminación del proceso, junto con el consecuencial levantamiento de las medidas

cautelares decretadas, petición acogida por el respectivo juzgado en providencia del 30 de septiembre de 2016 (f. 52 a 56 Archivo 01 ED).

DEL COBRO DE HONORARIOS – LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA

Vistos los límites de la contienda, lo primero a precisar por parte de la Sala es que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.142 Código Civil, el **mandato** es uno entre los diversos negocios jurídicos de gestión el cual consiste en “(...) *un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera (...)*”.

De igual forma, la misma codificación sustantiva plantea que el vínculo jurídico descrito puede ser “(...) *gratuito o remunerado. La remuneración es determinada por convención de las partes, antes o después del contrato, por la ley o por el juez (...)*” (Art. 2143 ibidem).

Bajo esa idea, en los términos del artículo 2184 Código Civil, convenido el mandato, la parte contratante, es decir, el mandante o comitente queda obligado a:

- “(...) 1. A proveer al mandatario de lo necesario para la ejecución del mandato;*
- 2. A reembolsarle los gastos razonables causados por la ejecución del mandato;*
- 3. A pagarle la remuneración estipulada o usual;*
- 4. A pagarle las anticipaciones de dinero con los intereses corrientes;*
- 5. A indemnizarle de las pérdidas en que haya incurrido sin culpa, o por causa del mandato.*

No podrá el mandante disculparse de cumplir estas obligaciones, alegando que el negocio encomendado al mandatario no ha tenido buen éxito o que pudo desempeñarse a menos costo; salvo que le pruebe culpa (...).

Así entonces, la reseña legal que antecede, de acuerdo a lo que interesa al asunto bajo estudio, deja entrever entre otras cosas, que la determinación del monto a cobrar en el marco de un contrato de mandato, se fija mediante el acuerdo de voluntades entre el cliente y el respectivo abogado, negociación que puede resultar con el pacto de un precio determinado por la gestión, o en otros casos, con la convención denominada *cuota litis*, la cual esta última, pese a partir de una cuantificación porcentual del monto a cancelar por honorarios, no tiene un carácter cierto y determinado, sino que es contingente y aleatoria, pues tanto su exigencia como su cuantía dependen de los resultados de la gestión.

No obstante, al tenor de las obligaciones referidas, en cualquiera de los casos, no puede la parte mandante sustraerse al pago de las sumas de dinero pactadas como remuneración, aduciendo no haber encontrado a satisfacción la gestión adelantada por el mandatario.

Esgrimido lo anterior, en el particular la discusión tiene como punto de partida el contrato de prestación de servicios profesionales de abogado, suscrito el 27 de agosto de 2013 entre la señora **YOMAN YURANI ECHAVARRÍA LÓPEZ** y el profesional del derecho RIGOBERTO OSPINA ORTIZ, que tenía como objeto que el segundo representara los intereses litigiosos de la primera, a efectos de que *“inicie y lleven hasta su terminación DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD ABSOLUTA de la escritura pública número 295 del 17 de junio de 2010 otorgada en la notaria Primera del Circulo Notarial de Yarumal Antioquia, en contra del señor NICOLÁS ARTURO ECHAVARRIA VELASQUEZ, mayor de edad, vecino y residente en Envigado”* (f. 9 Archivo 01 ED).

Dentro de los límites del pacto referido, en materia de remuneración, las contrayentes acordaron: *“(…) “CUARTA.- Las partes contratantes acuerdan tasar los honorarios profesionales por el sistema de cuota litis, en un porcentaje del treinta por ciento (30%) del valor de los derechos que le correspondan o llegaren a corresponder a LA MANDANTE en la sucesión de su finada madre ALIRIA DEL SOCORRO LOPEZ CRUZ. PARAGRAFO PRIMERO.- si la demanda ordinaria a qua se refiere el presente contrato, tuviere segunda instancia, el porcentaje que LA MANDANTE reconocer a favor de EL MANDATARIO ser del treinta y cinco por ciento (35%) del valor de los derechos que le con respondan o llegaren a corresponder a LA MANDANTE en la sucesión de su finada madre ALIRIA DEL SOCORRO LOPEZ CRUZ; pero si se llegare a algún acuerdo antes de evacuar las pruebas solicitadas en la demanda y su contestación, el porcentaje será solo del quince por ciento (15%) del valor de los derechos que se le reconozcan a LA MANDANTE en la sucesión de su finada madre ALIRIA DEL SOCORRO LOPEZ CRUZ. PARAGRAFO SEGUNDO. - si se condenare en costas al demandado, el cincuenta por ciento (50%) de las agendas en derecho que se tasen serán para EL MANDATARIO (…)”*.

En efecto, nótese que, de las pruebas arrimadas al legajo, observa la Sala que la gestión del abogado en comento inició entonces con la presentación de la demanda respectiva, a la que dio curso el JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE ENVIGADO (Rad. 001-2013-00591), trámite al cual compareció la parte pasiva formulando su respectiva oposición.

Posteriormente, se tiene que, dentro del avance normal de las actuaciones en dicho proceso, el 30 de abril de 2015 el profesional RIGOBERTO OSPINA ORTIZ radicó ante el Juzgado cognoscente, escrito de sustitución de poder que le había conferido al abogado **JAIME ALONSO JIMÉNEZ JIMÉNEZ**, quien adelantó varias gestiones en favor de la señora **YOMAN YURANI ECHAVARRÍA** al interior del proceso de familia mencionado (f. 31 a 41 Archivo 01 ED).

No obstante, como se dejó anotado desde los supuestos relevados de prueba, el litigio en cita culminó de manera anómala, previo desistimiento presentado por la propia **YOMAN YURANI ECHAVARRÍA LÓPEZ**, acogido finalmente por el Juzgado de conocimiento (f. 52 a 56 Archivo 01 ED).

A partir de lo anterior, consideró el abogado **JAIME ALONSO JIMÉNEZ JIMÉNEZ** que estaban dadas las condiciones para acudir al estrado judicial con la finalidad

de hacer efectivo el pago de lo presupuestado en la cláusula 4° del contrato de prestación de servicios, en cabeza de la ahora demandada.

No obstante, el primer escollo que encuentra su propósito económico, como bien lo advirtió el Juez de primer grado, es la legitimidad para efectuar el cobro directamente en contra de la señora **ECHAVARRÍA LÓPEZ**, teniendo en cuenta que no fue este quien acordó las condiciones contractuales invocadas como cimiento de las pretensiones en esta disyuntiva, sino el sustituto.

En ese orden de ideas, para desatar esta problemática, debe la Sala acudir a lo razonado por el Órgano de Cierre en materia Ordinaria, que de años atrás, por ejemplo, en su Sala de Casación Civil, al analizar un caso de ribetes similares, en providencia emitida el 22 de mayo de 1995 dentro del Rad. 4571, rememorada en decisiones del 11 de abril de 2012 – Rad. 001-2005-00005 y AC430-2018, señaló:

*(...) se desprenden las siguientes hipótesis, las cuales, obviamente, pueden ser alteradas por las partes: (...) **Si al mandatario no se le prohíbe la delegación, pero tampoco se le autoriza expresamente, se entiende que está facultado para hacerlo, pero en tal caso, responderá por los hechos del sustituto como de los suyos propios** (...) El mandante autoriza la delegación, más se abstiene de designar al sustituto. En tal evento, el mandatario se libera de cualquier responsabilidad, a menos que sustituya en persona notoriamente incapaz o insolvente (...) El mandante autoriza la sustitución y señala la persona del sustituto. En esta hipótesis existe un nuevo contrato de mandato entre el mandatario y el sustituto, de modo que el mandatario queda liberado de cualquier responsabilidad frente al mandante (...)*

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2164 del Código Civil, "El mandante podrá, en todos casos, ejercer contra el delegado las acciones del mandatario que le haya conferido el encargo", precepto que encuentra su razón de ser en la naturaleza intuitu personae, a que ya se ha hecho mención, del contrato de mandato, y que le permite al mandante considerar al sustituto como su propio mandatario, atribución que lo faculta, inclusive, para exigirle, en la medida en que aquel hubiese tenido conocimiento del mandato, que le rinda cuentas de su gestión. Es, pues, tal la razón por la que las excepciones que el sustituto puede oponerle a quien le confirió el apoderamiento no son eficaces frente al mandante (...) Pues bien, habiendo el mandante autorizado la sustitución, y teniendo a su favor todas aquellas potestades sobre el sustituto, es justo y equitativo que frente a esa acción directa de la cual es titular, exista, recíprocamente, otra que le permita a este reclamarle al mandante su remuneración, máxime cuando los frutos de su gestión solo a este benefician. En materia de apoderamiento judicial esta última cuestión es tan significativa, que el abogado sustituto considera como su "cliente", no al colega de quien recibió la delegación, sino al mandante de este (...)"

Luego, en el ámbito laboral, importa traer a colación lo previsto en Sentencia SL3350-2018, en la que, siguiendo la línea posicional de la homóloga Civil, la Sala de Casación Laboral anotó:

“(…) Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en casación, las cuales se acogen en sede de instancia, es necesario traer a colación la decisión de Sala de Casación Civil de esta Corporación CSJ AC, 11 abril 2012, radicado 23555-3189-001-2005-00005-01, en lo que respecta a la obligación del pago de honorarios que tiene el mandante cuando hay sustitución de poder entre el mandatario y el sustituto. En ella se expresó que «[e]sta Corporación en auto A-125 de 22 de mayo de 1995 exp. 4571, tangencialmente se refirió a la “remuneración del apoderado sustituto”, dejando claro que en principio “(…) solo puede exigirla del apoderado a quien sustituyó”, sin perjuicio que proceda su reclamación directamente a la parte misma [...]», aclarando el auto citado que «[...] habiendo el mandante autorizado la sustitución, y teniendo a su favor todas aquellas potestades sobre el sustituto, es justo y equitativo que frente a esa acción directa de la cual es titular, exista, recíprocamente, otra que le permita a este reclamarle al mandante su remuneración, máxime cuando los frutos de su gestión solo a este benefician».

En otras palabras, los honorarios del abogado sustituto proceden, como regla general, frente al abogado principal que le otorgó el poder, a menos que exista autorización expresa del mandante, caso en el cual el abogado sustituto puede reclamarlos directamente a éste.

Así, de lo anterior se colige que, para el caso concreto, al haber estado el demandante facultado para sustituir el poder, y al haberlo hecho sin que existiera prueba alguna de que fue con la autorización expresa del mandante, se entiende entonces que la relación jurídica que nació frente al abogado sustituto fue con el abogado principal, más no con el mandante. (...)” (Subraya y Negrilla de la Sala).

Puestas de ese modo las cosas, al contrastar la postura Jurisprudencial en cita con el componente factico de la presente contienda, es necesario que la Corporación aclare que la sustitución del mandato que hizo el abogado RIGOBERTO OSPINA ORTIZ a **JAIME ALONSO JIMÉNEZ JIMÉNEZ** no tiene señal de irregularidad o anomalía que anule sus efectos, pues, aunque no fue autorizada expresamente por la mandante, señora **YOMAN YURANI ECHAVARRÍA LÓPEZ**, esta puede darse conforme lo establecido en los artículos 2161 Código Civil y 75 CGP.

No obstante, donde encuentra el punto de quiebre el planteamiento de la parte accionante es en que, la sustitución en realidad no lo habilita a efectos de procurar la efectividad de la cláusula contractual que estipuló el pago de lo acordado por concepto de la gestión profesional del abogado.

Lo anterior, en la medida que contractualmente la potestad substitutiva no aparece consignada dentro de los linderos del acuerdo celebrado entre RIGOBERTO OSPINA ORTIZ y **YOMAN YURANI ECHAVARRÍA**, y probatoriamente en el actual proceso no es posible extraerla, de lo que deviene que el señor **JIMÉNEZ JIMÉNEZ**, parte actora en este asunto, cuenta con legitimación activa para reclamar por el pago de su ejercicio, pero en contra del abogado principal, y no de la hoy accionada, puesto que en palabras de la Corte Suprema, la relación jurídica que abre paso a su súplica, surgió con quien le sustituyó el

mandato, y no con la mandante como tal, intelección suficiente para mantener la decisión de primer grado.

De igual forma, para ahondar en razones que impiden el éxito de las pretensiones, no puede perderse de vista que la remuneración acordada en el contrato, en la modalidad a *cuota litis*, se hallaba atada exclusivamente al resultado positivo del proceso judicial que se iniciara, con la consecuente asignación de derechos a la señora **ECHAVARRÍA LÓPEZ** dentro del trámite sucesoral de su señora madre, o a los derechos que le fuesen asignados en el evento de llegar a un acuerdo con la contraparte (f. 9 Archivo 01 ED), circunstancias que, justamente, tampoco fueron demostradas en el particular, lo que dificultaría extraer entonces la obligación remunerativa a cargo de la demandada, en tanto que no aparecen configuradas las condiciones que daban lugar a cobrar determinado porcentaje monetario.

Por lo tanto, la Sala participa de las conclusiones a las que arribó el Juez *a-quo*, confirmando la Sentencia de primer grado.

Sin costas en esta instancia por haberse conocido en el grado de consulta.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

R E S U E L V E

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia N° 107 del 4 de noviembre de 2022, emitida por el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO.

SEGUNDO: Sin **COSTAS** en esta instancia.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,


MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL

